



MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE GOBERNANZA PÚBLICA

Expediente: 001-028362

Nombre: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha 8 de septiembre de 2018 tuvo entrada en la UIT del Ministerio de Hacienda solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por la persona indicada en el encabezado de esta resolución, solicitud que quedó registrada con el número 001-028362:

“1. Se solicita los documentos (leyes, reglamentos, instrucciones, circulares, acordados de gobierno, otras emisiones del Gobierno del Estado, etc.) que reconocen la efectividad de los siguientes derechos de los ciudadanos, y las obligaciones correlativas aplicables a todas las Administraciones Públicas de España:

i. El derecho a obtener informaciones y realizar consultas por la vía electrónica y las obligaciones correlativas de las AAPP.

ii. El derecho a realizar alegaciones por la vía electrónica y las obligaciones correlativas de las AAPP.

iii. El derecho a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados y las obligaciones correlativas de las AAPP.

iv. El derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado y las obligaciones correlativas de las AAPP.

v. El derecho a presentar los documentos que se dirigen a las Administraciones Públicas por cualquier medio (papel, soporte electrónico, etc.), en la

secretaria.dgpp@correo.gob.es

MANUEL CORTINA 2
28071 MADRID
TEL 91 273 32 46/47

CSV : [REDACTED]

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA PIA JUNQUERA TEMPRANO | FECHA : 24/10/2018 14:32 | Sin acción específica



administración destinataria. De particular interés es la fecha para garantizar la posibilidad de presentar presencialmente documentos ya digitalizados (ej. en Memoria USB) y las obligaciones correlativas de las AAPP. vi. El derecho a la digitalización y devolución de los documentos que los ciudadanos presentan en las oficinas de registro de las Administraciones Públicas y las obligaciones correlativas de las AAPP.

Ejemplos de documentos de interés son los siguientes:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5d75e090-c719-4d27-8027-ba09451f20fd/GUIA-PARA-EELL-PARA-EL-CUMPLIMIENTO-DIGITAL-DE-LAS-NUEVAS-LEYES-ADMINISTRATIVAS.pdf

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs%20LEY%2039-2015%20LEY%2040-2015.pdf

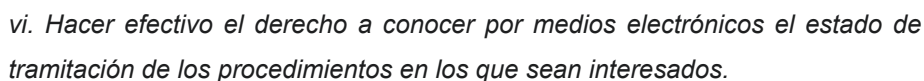
En relación con lo anterior, el solicitante señala que se solicita documentos que hacen referencias concretas e individualizadas a los derechos mencionados.

2. Se solicita los documentos (leyes, reglamentos, instrucciones, circulares, acordes de gobierno, otras emisiones del Gobierno del Estado, etc.) que establecen o indican fechas límites concretas pasadas o futuras de lo siguiente:

- i. La obligación de cada Administración de mantener un registro electrónico.
- ii. La obligación de cada Administración de mantener un registro electrónico único y un archivo único.
- iii. Hacer efectivo el derecho a presentar los documentos que se dirigen a las Administraciones Públicas por cualquier medio (papel, soporte electrónico, etc.) en la administración destinataria. De particular interés es la fecha para garantizar la posibilidad de presentar presencialmente documentos ya digitalizados (ej. en Memoria USB).
- iv. Hacer efectivo el derecho a obtener informaciones y realizar consultas por la vía electrónica.
- v. Hacer efectivo el derecho a realizar alegaciones por la vía electrónica.

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MARIA PIA JUNQUERA TEMPRANO | FECHA : 24/10/2018 14:32 | Sin acción específica



vii. *Hacer efectivo el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.*

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, el solicitante señala que se solicita documentos que hacen referencias concretas e individualizadas a las obligaciones y los derechos mencionados.”.

Con fecha 26 de septiembre de 2018 esta solicitud se recibió en la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

El plazo transcurrido entre la presentación de la solicitud a través del Portal de la Transparencia y el momento en que la misma se ha recibido en esta Dirección General de Gobernanza Pública trae causa de las dudas surgidas en el seno de la Administración sobre cuál era el órgano efectivamente competente para su resolución, debido a la naturaleza y amplitud de la información requerida, que en parte podría corresponder a las funciones atribuidas por la normativa a varios centros directivos, entre ellos la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Gobernanza Pública **concede el acceso a la información** en los términos siguientes:

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015) regula los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. Dicha Ley distingue entre los derechos de las personas con capacidad de obrar que se recogen en el artículo 13, y los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo consignado en el artículo 53 de la norma.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 12.2 de la Ley 39/2015 dispone que:



“Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio”.

En relación a la obligación de cada Administración de mantener un registro electrónico y un archivo único, debe señalarse que el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modifica en su título quinto la Ley 39/2015.

En el artículo sexto del Real Decreto-ley se dispone que: *“Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada en los siguientes términos:*

“Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”.

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA PIA JUNQUERA TEMPRANO | FECHA : 24/10/2018 14:32 | Sin acción específica



Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La Directora General de Gobernanza Pública
María Pía Junquera Temprano

CSV : [REDACTED]

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA PIA JUNQUERA TEMPRANO | FECHA : 24/10/2018 14:32 | Sin acción específica